

ENCLAVE LIBERAL

Una mirada joven y contemporánea que prioriza el lenguaje directo y la selección cuidadosa de contenidos relevantes. Enclave Liberal apunta a lectores curiosos, críticos y activos, que valoran la independencia intelectual, el contraste de ideas y una aproximación moderna a los debates del momento.



CECOS
Center for the Study of
Contemporary Open Societies



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.

Índice

Introducción.....	3
Ineficiencia estatal: ¿naturaleza inherente o fallo institucional?	4
Un Estado en una sola dirección	8
Pobreza, libertad y prosperidad.....	10
¿Los jóvenes son de izquierda o de derecha?	13

Introducción

La eficiencia del Estado no es una discusión técnica, es una discusión política. Cada peso que el sector público administra con torpeza es un peso que no llega a la escuela, al hospital o a la ruta que lo necesita.

Uruguay tiene una larga tradición de Estado presente. Esa tradición, sin embargo, no puede confundirse con Estado eficaz. La historia reciente muestra organismos superpuestos, trámites que se multiplican y una burocracia que crece más rápido que los resultados que produce.

Pensar la eficiencia estatal no es un ejercicio de reducir por reducir. Es preguntarse, con seriedad, qué funciones cumple mejor el Estado y cuáles delega mejor en la sociedad civil o en el mercado. Es también preguntarse cómo se mide el desempeño de una oficina pública, y qué consecuencias tiene no cumplir esa medición.

En esta tercera edición de Enclave Liberal reunimos miradas distintas sobre este problema. El objetivo no es repetir consignas sino aportar ideas concretas para un Estado que rinda cuentas, que gaste bien y que, sobre todo, sirva a quien paga sus impuestos.



INEFICIENCIA ESTATAL

¿NATURALEZA INHERENTE O FALLO INSTITUCIONAL?

Por: **Matías Ambrosoni**

El desarrollo económico sostenido requiere que el Estado intervenga lo menos posible ya que la acción gubernamental suele ser ineficiente en la asignación de recursos. Los críticos desde la izquierda política suelen responder que el problema no radica en el Estado en sí mismo, sino en una mala gestión o en una implementación deficiente. Una respuesta siempre ha sido que daría la bienvenida a un Estado capaz de administrar los recursos de forma más eficiente que una sociedad actuando libremente a través de los mercados. Este ensayo busca, por tanto, analizar si la ineficiencia estatal es una característica inherente a la acción gubernamental o si, por el contrario, es consecuencia del diseño institucional y constitucional.

La escuela austríaca de economía, especialmente a través de Friedrich Hayek, sostiene que la principal limitación de la intervención estatal en la economía no son las malas intenciones o la corrupción, sino un problema de conocimiento. Incluso suponiendo gobernantes benevolentes, competentes y bien intencionados (supuesto sobre el que soy escéptico, ya que en la práctica la mayoría de los responsables políticos tienden a perseguir intereses personales o políticos antes que el bienestar social), el Estado carece del tipo de conocimiento necesario para asignar los recursos de manera eficiente. El núcleo del argumento es que el conocimiento económico es descentralizado, tácito y específico de cada contexto. La información sobre

preferencias, costos de oportunidad, condiciones locales y escasez solo existe en la mente de los individuos y cambia continuamente. Gran parte de ese conocimiento no puede agregarse ni transmitirse a una autoridad central de forma útil. Los mercados resuelven este problema mediante el sistema de precios, que actúa como un mecanismo para comunicar información dispersa y convertirla en señales que orientan la toma de decisiones individuales sin que ningún actor necesite comprender el funcionamiento completo del sistema.

Además del problema del conocimiento, la escuela austríaca también enfatiza el problema de los incentivos. En este punto resulta ilustrativa la conocida clasificación de Milton Friedman sobre las distintas formas de gastar dinero. Cuando una persona gasta su propio dinero en sí misma, suele ser lo más eficiente posible. Conoce cuánto esfuerzo le costó ganar ese dinero y, además, sabe exactamente qué necesita y qué le genera mayor satisfacción. Por eso compara opciones, busca el mejor precio y procura obtener el máximo valor por cada peso gastado. Cuando una persona gasta su propio dinero en otra, como al hacer un regalo, sigue teniendo incentivos para cuidar el dinero porque es suyo. Sin embargo, ya no conoce con la misma precisión qué es lo que la otra persona realmente quiere o necesita. Aunque procure gastar responsablemente, es más probable que el resultado no sea el que genere el mayor beneficio para quien recibe el bien o servicio. En cambio, cuando una persona gasta el dinero de otro en sí misma, sucede lo contrario. Como quien paga es un tercero, el incentivo a controlar el gasto disminuye. No obstante, quien

toma la decisión sí sabe perfectamente qué desea o qué le resulta útil, por lo que probablemente obtenga algo que valora, aunque a un costo mayor del que habría aceptado si estuviera utilizando su propio dinero. Finalmente, cuando una persona gasta el dinero de otros en beneficio de otros, como ocurre con el gasto público, desaparecen ambos incentivos al mismo tiempo. Quien decide el gasto no siente el costo porque el dinero no es suyo y, además, tampoco conoce con exactitud las preferencias de quienes recibirán el bien o servicio. En consecuencia, aumenta la probabilidad de despilfarro y de una asignación ineficiente de los recursos, incluso cuando no existe corrupción ni malas intenciones. Desde esta perspectiva, la ineficiencia del gasto estatal no es únicamente una cuestión de quién gobierna, sino que responde a una estructura de incentivos que dificulta tomar decisiones tan eficientes como las que realizan millones de individuos actuando libremente en el mercado.

¿Se aplica esta lógica de manera universal o puede el Estado ser eficiente en determinadas áreas? Según la economía política constitucional de James Buchanan, la eficiencia depende menos de las características individuales de los gobernantes que de las reglas institucionales bajo las cuales actúan. Un Estado eficiente requiere límites constitucionales estrictos, mecanismos de pesos y contrapesos, disciplina fiscal, transparencia y rendición de cuentas, así como la utilización de mecanismos compatibles con el mercado, como la competencia, la descentralización y las políticas basadas en reglas. Desde esta perspectiva, la eficiencia no surge de expandir el poder del Estado, sino de

diseños institucionales que limitan la discrecionalidad y alinean los incentivos con el bienestar social.

La experiencia de los países nórdicos suele citarse como evidencia de que el Estado puede ser relativamente eficiente bajo determinadas condiciones. Si bien estas economías cuentan con amplios sectores públicos, su éxito no proviene de un control estatal extensivo sobre la producción, sino de instituciones sólidas, una elevada capacidad administrativa y una clara separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios. En áreas como la educación, la administración sanitaria y las políticas de bienestar, los Estados nórdicos dependen en gran medida de la competencia entre proveedores, la descentralización hacia los gobiernos locales y la evaluación basada en el desempeño.

Estudios empíricos como los de Bergh y Henrekson (2011)¹ y Acemoglu, Robinson y Verdier (2012)² muestran que estos países combinan altos niveles de tributación con sólidos derechos de propiedad, mercados abiertos y bajos niveles de corrupción, lo que permite que el Estado funcione eficazmente en ámbitos específicos. Es importante destacar que esta eficiencia parece depender de una calidad institucional excepcional, elevados niveles de confianza social y fuertes restricciones

constitucionales, lo que sugiere que estos resultados no son fácilmente replicables y no contradicen la preocupación de la escuela austríaca sobre los problemas de conocimiento e incentivos, sino que muestran cómo un diseño institucional cuidadoso puede mitigarlos parcialmente en contextos particulares.

Desde mi perspectiva, el Estado debería encargarse de tres funciones fundamentales, tal como argumentaba Milton Friedman: la defensa nacional, la policía y la seguridad interna —incluido el sistema de justicia—, y el establecimiento de las reglas generales del juego.

Friedman también sostenía que áreas como la salud y la educación podían ser provistas por el Estado, no mediante administración directa, sino a través del financiamiento público. Un ejemplo clásico es el sistema de vouchers educativos, que subsidia la demanda en lugar de la oferta, haciendo que la provisión de educación sea más eficiente que si estuviera directamente administrada por el Estado. Personalmente, añadiría que, bajo determinadas circunstancias, el Estado puede intervenir frente a externalidades negativas, como la contaminación. Si bien algunos sostienen que estos problemas pueden resolverse mediante la negociación privada o las decisiones de los consumidores, estas posturas

1- Bergh, A., & Henrekson, M. (2011).

Government size and growth: A survey and interpretation of the evidence. *Journal of Economic Surveys*, 25(5), 872–897.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00697.x>

2- Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Verdier, T. (2012).

Can't we all be more like Scandinavians? Asymmetric growth and institutions in an interdependent world. National Bureau of Economic Research Working Paper Series (No. 18441).
<https://www.nber.org/papers/w18441>

asumen un comportamiento plenamente racional, supuesto que rechazo. En línea con la teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman, las personas suelen actuar de manera irracional y con una visión de corto plazo, lo que puede generar perjuicios de largo plazo. En estos contextos, una intervención estatal limitada —como la mediación o la regulación— puede ayudar a evitar que la búsqueda de beneficios inmediatos produzca daños mayores en el futuro.

En conclusión, la ineficiencia del Estado es, en gran medida, un fenómeno estructural más que simplemente un problema de gestión. Si bien el diseño institucional y constitucional puede mitigar algunos de los problemas de información e incentivos identificados por la escuela austríaca, dicha eficiencia solo es posible bajo restricciones estrictas y en ámbitos limitados. En consecuencia, el desarrollo económico depende menos de contar con mejores gobernantes y más de una humildad constitucional: reconocer los límites del conocimiento político y diseñar instituciones que los respeten.



UN ESTADO EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Por: Julián Oliveri

El 30 de junio el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento la Rendición de Cuentas. El trámite es tan viejo como nuestra vida institucional. El gobierno rinde su balance, el Parlamento lo examina y el ciudadano, en teoría, se entera de qué se hizo con su dinero. Eso dice la Constitución. La práctica, desde hace décadas, dice otra cosa.

Esta Rendición llega con un incremento de gasto de unos 3.200 millones de pesos y con prioridades que nadie discutiría, como la infancia, la seguridad, la educación y las personas en situación de calle. El problema no está en los fines. Está en el método. Para financiar el gasto nuevo, el gobierno recurre a la reestimación al alza de impuestos votados el año pasado y a la quita de la exoneración fiscal que amparaba a los autos eléctricos. Es decir, más recaudación. Otra vez. Conviene detenerse en el detalle de los autos eléctricos, porque es pequeño y es elocuente. Hace apenas unos años, el Estado uruguayo decidió que la movilidad eléctrica era una política de futuro y la subsidió con entusiasmo. Hoy, el mismo Estado le retira el beneficio porque necesita caja. No hubo un cambio de convicción ambiental ni una evaluación de resultados. Hubo una necesidad recaudatoria. Las señales que el Estado le envía al ciudadano que invierte, que compra, que planifica, duran lo que dura una Rendición.

La historia de estas leyes es la historia de una asimetría. El gasto público uruguayo conoce una sola dirección, que es la de crecer. Cada Rendición agrega partidas y ninguna suprime en serio las que envejecieron. Cuando falta dinero, la respuesta nunca es revisar lo que el Estado ya hace y quizás no debería seguir haciendo. La respuesta es un impuesto nuevo, una exoneración menos, una tasa más. El ajuste siempre lo hace el contribuyente. La administración, no.

La misma semana en que el Parlamento comenzaba a estudiar la Rendición, la bancada oficialista reflató otro proyecto, el que regula la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La iniciativa viene de 2020 y en su versión original exigía, para que un extranjero pudiera comprar campo, ciudadanía legal o diez años de residencia comprobada, y directamente vedaba la adquisición a las empresas constituidas en el exterior. Ni siquiera entonces logró el consenso de la propia bancada que la presentó. Entre 2001 y 2017 se vendieron ocho millones de hectáreas y la mayor parte fue a parar a sociedades anónimas de capital mayoritariamente extranjero, mientras miles de productores familiares dejaban el campo. Es un dato serio y merece políticas serias, desde una colonización eficaz hasta el crédito, la caminería y la escuela rural. Lo que no resiste el análisis es la respuesta elegida, que consiste

en prohibir y restringir. Además de que Uruguay ya tiene, desde 2014, una ley que impide la compra de tierra a empresas vinculadas a Estados extranjeros, que era el riesgo genuino. Lo que ahora se restringe no es la potencia extranjera sino el inversor privado. El que trae capital, tecnología y trabajo.

Hay una ironía histórica que no debería pasar inadvertida. Este país se hizo con tierra abierta y puertos abiertos. Los inmigrantes que llegaron en el siglo XIX no encontraron un Estado que les pidiera diez años de residencia para arraigarse. Encontraron uno que los necesitaba y lo sabía. De esa apertura salieron las estancias, las chacras, los almacenes de ramos generales

Y hay también una ironía regional. Mientras nuestros legisladores discuten cómo ponerle requisitos al capital que quiere comprar campo, del otro lado del río se debate exactamente lo contrario, la eliminación de los topes que limitaban la compra de tierra por extranjeros.

Vistas juntas, la Rendición y el proyecto de tierras dejan de ser dos noticias para volverse una sola. En ambas opera el mismo reflejo. Ante cada problema, más Estado. Ante cada necesidad, más impuestos. Ante cada duda, más restricciones. Nunca la pregunta inversa sobre qué puede dejar de hacer el Estado, qué puede devolverle a la sociedad, en qué puede simplemente confiar. Uruguay no necesita solo un Estado más chico, necesita algo más exigente. Necesita un Estado capaz de mirarse en el espejo del balance que dice rendir. Un Estado que antes de crear el impuesto número ciento

y tantos se pregunte qué gasto ya no se justifica, y que antes de ponerle requisitos al que quiere invertir en nuestra tierra se pregunte por qué tantos uruguayos ya no pueden hacerlo.

Ese examen, y no el trámite de cada julio, sería una verdadera rendición de cuentas.

POBREZA, LIBERTAD Y PROSPERIDAD

Por: **Santiago Pérez Bentancort**



El estudio de la pobreza como fenómeno humano es uno de los tópicos de mayor interés en la academia. Asimismo, resulta un tema frecuentemente tratado en las noticias y en los programas políticos. Dada su relevancia, es importante saber bien qué es la pobreza; así como separarla de otros conceptos radicalmente distintos y explicitar cuáles son los caminos para conquistarla.

La pobreza desde una perspectiva humana

Toda acción humana es una conducta consciente y deliberada, enfocada al alcance de fines personales a través de medios que el actor considera como útiles. Los fines se ordenan según el valor subjetivo que les asignamos. En este sentido, definiremos a un individuo como “pobre” si los medios que dispone son insuficientes para alcanzar los fines que éste considera más urgentes. El carácter subjetivo de esta definición no es trivial, teniendo implicancias a la hora de medir la pobreza en nuestro país que comentaré más adelante.

Por otra parte, muchos autores sostienen correctamente que la pobreza es el estado natural del ser humano. La historia de la

pobreza es prácticamente la historia de la humanidad. La escasez de medios fue siempre la cruda realidad de las civilizaciones humanas, progresivamente volviéndose menos severa conforme ha avanzado el comercio, el ahorro, la innovación y la consolidación de instituciones clave como la propiedad privada.

No confundir “pobreza” con “desigualdad”

Muchos académicos, profesionales y políticos redirigen las cuestiones vinculadas a la pobreza hacia otros conceptos muy distintos, principalmente la desigualdad. El error detrás de esta confusión radica en la creencia de que la economía puede reducirse a un “juego de suma cero”, en donde las ganancias de unas personas tienen por contraparte las pérdidas de otras personas.

Esta concepción estática de la economía ignora completamente el carácter dinámico y empresarial de los procesos de mercado. La teoría nos enseña que a cada uno se le tiende a pagar de acuerdo con el valor presente que el mercado asigna a su aporte en la producción, a materializarse en el futuro. Dicho aporte no es mecánico, sino que es fruto de

percibir las oportunidades en el entorno y actuar en consecuencia, que deriva en un beneficio personal.

Pero la acción humana no sólo produce beneficios para quien actúa, sino también para todos los que participan en el proceso productivo. A modo de ejemplos: si un empresario invierte en capital físico, mejora la productividad de los trabajadores y aumenta sus salarios; o si un trabajador invierte en capital humano, permite aumentar el potencial productivo de su empresa y generar mayores beneficios. De igual forma, los bienes y servicios que las empresas ofrecen benefician a quienes los adquieren al satisfacer necesidades personales.

Los procesos de mercado se interconectan y se influyen recíprocamente. Los mismos se basan en la cooperación humana y generan beneficios para todas las personas en una sociedad. De esta forma, la desigualdad no es más que una consecuencia menor, mientras que lo esencial se encuentra en los procesos subyacentes de generación de riqueza.

Lecciones de la historia económica de Uruguay

La academia identifica dos grupos de sistemas económicos radicalmente distintos: aquellos basados en la libertad empresarial, la creatividad humana y el orden espontáneo del mercado; y aquellos basados en la coerción del Estado, la burocracia y el intervencionismo. Ambos sistemas tienen diferentes implicancias para la conquista de la pobreza, y la historia económica del Uruguay nos ofrece valiosas lecciones.

Contrario a la visión tradicional, Uruguay se benefició enormemente de la temprana adopción del liberalismo entre 1830 y 1875, al punto de lograr un ingreso per cápita similar a Inglaterra, Francia y Alemania. Nuestro país fue una enorme oportunidad de progreso para inmigrantes: Montevideo se volvió una de las ciudades con mayor formación de puestos de trabajo en la región al punto que instituciones financieras internacionales recomendaban invertir en Uruguay. ¿Existía pobreza en aquel entonces? Probablemente sí, relativo a la época y a la inmigración, pero miseria duradera de ningún modo.

Doscientos años después, la realidad del Uruguay es radicalmente distinta: según datos del INE el 16,6% de la población es identificada como pobre únicamente considerando el nivel de ingresos, mientras que el 18,7% lo es bajo el criterio “multidimensional” al considerar privaciones en educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo. Quizás el dato más alarmante sea el que se ajusta más a nuestra definición de pobreza dada antes: el 31,3% de los uruguayos considera que es pobre.

¿Qué fue lo que ocurrió para llegar a esta situación? A partir de 1875, nos cerramos al mundo y el Estado pasó a intervenir en todos los aspectos de la economía. Esto derivó en menor crecimiento económico y menores oportunidades de progreso. En cierto sentido, la historia económica del Uruguay es una historia de divergencia con respecto a los países desarrollados, lo que se tradujo en un aumento significativo de la pobreza en su correcta concepción.

Y la culpa es del Estado. El estatismo que caracterizó siempre al Uruguay (en sus distintas versiones: militarismo, batllismo, modelo “ISI”, progresismo...) se entiende únicamente como un sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la empresarialidad. La intervención del Estado dificulta o imposibilita aquellos procesos de mercado que constituyen la fuente de riqueza y prosperidad de una sociedad. Y la evidencia internacional lo demuestra: los países ricos tienen economías de libre mercado, mientras que los países pobres tienen regímenes estatistas.

Reformas pendientes

Se podría decir que somos pobres gracias al Estado, o que hemos progresado como sociedad a pesar del Estado. No hay que estar conformes con la realidad del Uruguay y es necesario un cambio: el libre mercado es el único camino posible para que los individuos superen la condición de pobreza.

Para ello, es necesario abandonar toda estrategia política basada en transferencias, subvenciones y servicios estatales intensivos. Hay que priorizar reformas que permitan potenciar el crecimiento económico de nuestro país: reducir regulaciones y barreras a la empresarialidad, reducir el gasto público con cargo a menor presión fiscal, aumentar la apertura comercial, mantener una moneda sana y consolidar un régimen jurídico con foco en la propiedad privada.

Asimismo, reformas que apunten a la descentralización de la administración estatal en áreas clave y al impulsar la formación de capital humano pueden ser complementarias. Se debería avanzar en una transformación profunda del sistema estatal de educación y de cuidados a través de varias reformas: mayor autonomía, mayor descentralización administrativa, adoptar un sistema de *vouchers* y promover la iniciativa privada.

La conquista de la pobreza es un proceso intergeneracional que solamente puede lograrse a través de promover la libertad empresarial, la capacidad creativa del ser humano y el orden espontáneo del mercado. Las conclusiones son sencillas, pero las reformas necesarias no son fáciles de consolidar a nivel político. No hay grandes cambios que no requieran de una fuerte convicción y de la promoción de las ideas correctas.

¿LOS JÓVENES SON DE IZQUIERDA O DE DERECHA?

LO QUE LAS URNAS Y LAS ENCUESTAS REVELAN SOBRE EL VOTO JOVEN EN AMÉRICA LATINA

Por: Lautaro Velázquez



Durante buena parte del siglo XX la juventud estaba asociada a la izquierda. La rebeldía, el idealismo y la impaciencia empujaban hacia el cambio, y “cambio”, en ese contexto, quería decir izquierda. Después vino una ola de triunfos de derecha en América Latina y muchos dieron por sentada la respuesta opuesta: ahora los jóvenes serían de derecha. Este artículo parte de una sospecha incómoda: que ninguna de las dos respuestas resiste el contraste con los datos, y que la pregunta (¿los jóvenes son de izquierda o de derecha?) quizás esté peor planteada de lo que parece.

Los datos sobre la mesa

Empecemos por los hechos. En poco más de dos años, América Latina vivió un giro electoral a la derecha difícil de exagerar. Argentina eligió a Javier Milei en 2023; ese

mismo año Ecuador se inclinó por Daniel Noboa y Paraguay confirmó a Santiago Peña. En 2024 se sumaron José Raúl Mulino en Panamá, Luis Abinader en República Dominicana y la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. 2025 trajo a José Antonio Kast en Chile, a Rodrigo Paz en Bolivia (fin de veinte años de MAS) y a Nasry Asfura en Honduras. Y 2026 abrió con Laura Fernández en Costa Rica y con la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, que desplazó al petrismo. La izquierda, hegemónica hace un lustro, quedó reducida a un puñado de países, Uruguay entre ellos.

Sería tentador leer esa ola como la prueba de que la juventud se volvió de derecha. Pero cuando uno mira las encuestas por edad, y no el resultado global, el cuadro se vuelve mucho menos lineal.

Tabla 1: El voto joven en las elecciones recientes de América Latina

País	Elección	Presidente electo (orientación)	¿A quién votaron los jóvenes?
Argentina	2023	Javier Milei (derecha libertaria)	A la derecha: 54% vs. 33% de Massa entre los 16 y 35 años ^[1]
El Salvador	2024	Nayib Bukele (derecha populista)	A la derecha: ganó con 84,65%; se impuso en todos los tramos (sin desglose etario publicado) ^[2]
Uruguay	2024	Yamandú Orsi (centro-izquierda); ganó la izquierda	A la derecha: entre menores de 25, Delgado 49% vs. Orsi 38% ^[3]
Ecuador	2025	Daniel Noboa (centro-derecha)	Empate: González 38% vs. Noboa 37% en menores de 25; Noboa ganó entre los mayores de 60 ^[4]
Chile	2025	José A. Kast (derecha conservadora)	Fractura de género: entre menores de 35, hombres Kast 57,3%, mujeres Jara 51,4% ^[5]
Colombia	2026	Abelardo de la Espriella (ultraderecha)	A la izquierda: Cepeda 68,2% vs. 24,4% (De la Espriella) en 18 a 24; único tramo que perdió la derecha ^[6]

Otros triunfos de derecha del período, como Paraguay (Peña, 2023), Panamá (Mulino, 2024), República Dominicana (Abinader, 2024), Bolivia (Paz, 2025), Honduras (Asfura, 2025) y Costa Rica (Fernández, 2026), no cuentan con cortes etarios finos comparables. Nota: los cortes por edad provienen de encuestas, varias preelectorales, o de estimaciones sobre datos electorales (DecideChile, en Chile); con voto secreto no existen escrutinios oficiales por edad.

Fuentes de la tabla:

1. Argentina: CB Consultora (octubre 2023): Milei 54% vs. Massa 33% en la franja de 16 a 35 años. Ver también La Nación, "El voto por edades" (17/11/2023).
2. El Salvador: Resultados oficiales (TSE, 2024): Bukele ganó con 84,65%; con ese margen se impuso necesariamente en todos los tramos etarios. No existe un desglose público del voto por edad; su fuerte respaldo juvenil se reporta de forma cualitativa (BBC y CNN, 2024).
3. Uruguay: D. Luján y D. Vairo (2025), en "Elecciones y comportamiento electoral en una democracia de partidos. Ciclo electoral 2024" (Depto. de Ciencia Política, Udelar / FCU), vía la diaria: en el balotaje, entre los menores de 25 años Delgado (centroderecha) obtuvo el 49% y Orsi (FA) el 38%; entre los mayores de 24, Orsi rondó el 52% frente al 35% de Delgado.
4. Ecuador: Comunicaliza (2 y 3 de abril de 2025, vía Infobae): entre los menores de 25, González 38% vs. Noboa 37% (empate técnico); Noboa ganaba entre los mayores de 60 (~50%).
5. Chile: DecideChile, informe "Un resultado anunciado" (balotaje presidencial 2025): votación estimada por candidato según género y rango etario. Entre los menores de 35 años, Kast obtuvo el 57,3% de los hombres y Jara el 51,4% de las mujeres. Las encuestas de balotaje de CADEM (~58%) y Critería (~51%) midieron solo el resultado global, sin corte etario.
6. Colombia: AtlasIntel (junio 2026): entre los votantes de 18 a 24 años, Cepeda 68,2% vs. De la Espriella 24,4% (único tramo etario que perdió la derecha); De la Espriella prevalecía entre los mayores de 35.

El caso que para muchos parece anticipar la asociación entre juventud y derecha es Argentina. Ahí el voto joven fue el corazón de la victoria libertaria: Milei duplicó a Massa entre los menores de 35. En El Salvador, Bukele arrasó con casi el 85% e, inevitablemente, se impuso también en la juventud, aunque no exista un desglose etario que aísle ese voto.

Sin embargo, si afinamos el ojo y analizamos los datos en otras regiones, esa hipótesis comienza a difuminarse. Por ejemplo, Colombia va en la dirección opuesta: el tramo de 18 a 24 fue el único que la derecha perdió, y por goleada, con Cepeda en el 68,2% contra el 24,4% de De la Espriella. En Ecuador la juventud se partió en un empate técnico, y en El Salvador no hay un corte etario confiable que aísle el voto joven. En Chile, la cuestión no pasa tanto por la edad, sino por el género: entre los menores de 35, los varones eligieron a Kast (57,3%) y las mujeres a Jara (51,4%). Y en Uruguay, donde la izquierda retuvo el gobierno con Yamandú Orsi, los menores de 25 igual se inclinaron por la centroderecha de Álvaro Delgado, 49% contra 38%.

Entonces, ¿izquierda o derecha? Los datos sugieren que la pregunta correcta es otra. Los jóvenes no son un bloque ideológico estable, sino el electorado más volátil y antisistema, el que se vuelca con más fuerza hacia quien encarna la

ruptura. Cuando esa ruptura tiene cara de outsider de derecha, como Milei o Bukele, la juventud se derecha de forma espectacular. Cuando la derecha se presenta con un rostro tradicional o de establishment, como Kast, Noboa o De la Espriella, el voto joven se divide o se corre a la izquierda. No es que los jóvenes sean de izquierda o de derecha: es que votan sobre todo contra lo que ya hay.

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha?

Conviene, antes de seguir, ponerse de acuerdo en las palabras. Como recuerda Josep M. Vallès, la política existe para gestionar los conflictos de una sociedad y, por su carácter público, toda decisión necesita justificarse en nombre de ciertos valores; las ideologías ordenan esos valores dispersos, y la díada izquierda-derecha es su versión más reducida: sobrevive porque es simple, y en política lo simple es lo que llega. Sobre qué la define, la respuesta más útil sigue siendo la de Norberto Bobbio: lo que separa a la izquierda de la derecha es su actitud frente a la igualdad. La izquierda mira aquello que hace a las personas semejantes y busca igualarlas; la derecha, aquello que las diferencia, y acepta esas diferencias como parte del orden de las cosas. Bobbio agrega el matiz del artificialismo (la izquierda ve las desigualdades como

un constructo corregible; la derecha, como algo natural que el Estado no debería enmendar por decreto) y un segundo eje, libertad y autoridad, que distingue moderados de extremos. Ese eje explica por qué en la tabla conviven cosas tan distintas: el anarcocapitalismo de Milei, el conservadurismo securitario de Kast y el centro pragmático de Paz son todos “derecha”, y ninguno se parece demasiado al otro.

Por qué los jóvenes son el voto más volátil

Si los jóvenes votan contra lo que hay, hay que entender contra qué. La explicación más sólida es el voto de castigo. La “marea rosa” que gobernó gran parte de la región durante dos décadas dejó, en muchos casos, inflación, estancamiento, informalidad y corrupción. Para un votante que evalúa de forma retrospectiva, la ecuación es fácil: si quien prometía justicia social entregó crisis, el voto se va enfrente. Y los jóvenes viven esa desilusión con más crudeza que nadie: son los primeros expulsados del empleo formal y los que menos margen de ahorro tienen frente a un costo de vida creciente. Para quien no ve futuro en el Estado ni como empleador ni como protector, el discurso del esfuerzo individual y del mercado encuentra eco. Pero, atención: ese mismo malestar puede volcarse a la izquierda cuando es la derecha la que gobierna y decepciona, como muestran Chile, Ecuador y Colombia. Lo estable no es la dirección del voto, sino el castigo. Aunque en este punto conviene aclarar que lo que importa no es qué ideología tiene el gobierno de turno, sino que se trata más de una percepción de esa ideología a lo largo de varios años. En otro sentido, lo que importa es qué tan

desgastada está una ideología en el país. La ciencia política tiene un nombre para esto: Noam Lupu, estudiando por qué colapsan los partidos en América Latina, lo llama la dilución de la marca partidaria. Su punto es que lo que sostiene o hunde a una fuerza política no es su desempeño objetivo, sino qué tan nítida sigue siendo su “marca” en la percepción de la gente; y cuando esa marca se desdibuja, sea por contradecirse en el gobierno o por terminar pareciéndose a sus rivales, los votantes que nunca tuvieron una lealtad previa, es decir los más jóvenes, son los primeros en soltarla. Si la izquierda se asocia como lo hegemónico en un país determinado, entonces la rebeldía es votar por lo contrario. Por otro lado, si la derecha se asocia como lo tradicional y como el lado conservador del país, la izquierda representa la esperanza en las nuevas generaciones. Es por eso que Álvaro Delgado, aunque sea el candidato oficialista, termina recibiendo más votos por parte de la juventud, ya que fue el Frente Amplio quien gobernó buena parte del siglo XXI. Lo mismo sucedió en Colombia, con Iván Cepeda, candidato del oficialismo de izquierda. La derecha en Colombia gobernó 20 años de los 26 que tiene el siglo XXI. Es lógico que ya sea una ideología gastada.

Una generación sin memoria de dictadura

Hay un factor que amplifica esa disponibilidad: la memoria. Para las generaciones formadas en los setenta y ochenta, “derecha” en América Latina estuvo asociada con la dictadura. Los jóvenes de hoy no tienen ese recuerdo; su memoria política está hecha de gobiernos progresistas que administraron la crisis, de causas por corrupción y de la sensación de que el sistema funcionaba

para otros. Donde una generación veía un tabú, la siguiente ve apenas una opción más en el menú, y por eso puede moverse de un extremo al otro con una facilidad impensada hace treinta años.

El ecosistema digital: la política como estética

Nada de esto operaría sin el canal que lo amplifica. Los jóvenes se politizan en TikTok, YouTube, Instagram y X, donde el mensaje emocional y confrontativo rinde más que el matiz. Las nuevas derechas entendieron ese lenguaje antes que nadie: no se presentan como una ideología rígida sino como una identidad, casi una estética: el emprendedor, el “self-made”, la rebeldía “anticasta”.

La brecha de género: por qué los jóvenes no votan en bloque

Esta es la pieza que reconcilia el mapa desparejo del principio. El giro juvenil a la derecha es, ante todo, masculino. La misma maquinaria digital que difunde el discurso del esfuerzo difunde, pegada a él, una reacción antifeminista: los universos del “gymbro”, de la manófera y de los influencers que hacen de la masculinidad una bandera. Mientras las mujeres jóvenes se movilizaban en la última década alrededor de las causas feministas, y se corrieron a la izquierda, muchos varones jóvenes leyeron ese avance como una pérdida de estatus y encontraron en la nueva derecha un lugar donde nombrar ese malestar.

Por eso los jóvenes no se mueven como un bloque, sino partidos por la mitad, y Chile lo muestra con una nitidez de manual. Según DecideChile, entre los menores de 35 los varones votaron a Kast por 57,3% contra 42,7%, mientras que las mujeres eligieron a Jara por 51,4% contra 48,6%: el mismo tramo de edad, en el

mismo balotaje, votando en direcciones opuestas según el género. En Argentina, el envión de los varones jóvenes, sumado a un outsider disruptivo, fue tan fuerte que arrastró a toda la cohorte a la derecha; en Colombia, en cambio, el conjunto de los más jóvenes se inclinó a la izquierda. El mismo realineamiento, lo que los politólogos llaman feminización del voto progresista y masculinización del voto de derecha, aparece documentado también en Uruguay. La respuesta a “¿izquierda o derecha?” depende, cada vez más, de si preguntamos por ellos o por ellas: el género predice hoy la ideología juvenil con una fuerza que las generaciones anteriores no conocían.

Ni una cosa ni la otra

Volvamos a la pregunta del título. Los jóvenes no son, de manera estable, ni de izquierda ni de derecha. Son el electorado más disponible, más volátil y más antisistema, dividido por dentro según el género y guiado menos por una doctrina que por un rechazo: a lo existente, a la casta, a un futuro que no llega. Por eso su voto es tan difícil de retener: en la propia Argentina ya asoman señales de desencanto juvenil con el gobierno que esos mismos jóvenes ayudaron a construir.

Si algo enseña este recorrido es que quien gane el voto joven lo tendrá siempre en préstamo, nunca en propiedad. La lealtad de esta generación no se hereda de una tradición ni se compra con una consigna: se gana entregando resultados y respetando, al mismo tiempo, las reglas del juego que hacen posible pedirlos. La pregunta útil, entonces, no es de qué lado están los jóvenes, sino qué están dispuestos a premiar y a castigar. Y esa respuesta, por ahora, la siguen escribiendo elección tras elección.

Referencias conceptuales

Bobbio, N. (1996). Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Taurus.

Vallès, J. M. (2000). Ciencia política: una introducción. Ariel.

Latinobarómetro (2024). Informe 2024: La democracia resiliente. Corporación Latinobarómetro.

Lupu, N. (2016). Party Brands in Crisis: Partisanship, Brand Dilution, and the Breakdown of Political Parties in Latin America. Cambridge University Press.

Si te quedaste leyendo hasta acá, ya tenés una idea de qué se trata esto. Nuestra idea es generar análisis con rigor, honestidad y muchas ganas de cuestionar las cosas juntos.

El mes que viene nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, si algo de lo que leíste te dejó pensando, te hizo ruido o te dio ganas de debatir, entonces cumplimos nuestro objetivo y te incentivamos a dejar un comentario en nuestro instagram ([@horizontejoven_uy](https://www.instagram.com/horizontejoven_uy)).

¡Nos vemos en la próxima edición de Enclave!

EDITORES

Julián Oliveri
Valentin Benitez
Pedro Isern

AUTORES

Matías Ambrosoni
Julián Oliveri
Santiago Pérez Bentancort
Lautaro Velázquez

DISEÑO Y MAQUETADO

Rodrigo Iberra

CESCOS.ORG

ENCLAVE LIBERAL



CESCOS
Center for the Study of
Contemporary Open Societies



Horizonte
Joven



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.